

**Auto:** AI-081  
**Proceso:** Conflicto de competencia.  
**Demandante:** Empresas Públicas de Medellín E.S.P  
**Demandados:** Calamar Constructora de Obras S.A.S y Otros  
**Radicado:** 05001 22 03 000 2023 00214 00  
**Mag. Ponente:** Julián Valencia Castaño  
**Asunto:** Dirime conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Bello y el Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad de Medellín  
**Sinopsis:** El orden de los factores consulta exactamente el mayor grado de lesión a la validez del proceso, especialmente cuando su inobservancia se deriva del factor subjetivo, advirtiendo que, en este supuesto, la competencia se hizo improrrogable, y deberán aplicarse las pautas de atribución legal privativa que merece mayor estimación legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, en razón de la naturaleza jurídica.

**TRIBUNAL SUPERIOR  
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN  
SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN**

Medellín, Doce (12) de septiembre del dos mil Veintitrés (2023).

Concita la atención de la Sala dirimir el conflicto negativo de competencia suscitado entre el **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE BELLO** y el **JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN**, en torno a la asunción del conocimiento del proceso de servidumbre eléctrica instaurado por Empresas Públicas de Medellín E.S.P en contra de la Sociedad Inversiones los 7 S.A.S, que luego fue sucedida procesalmente por la Sociedad Calamar Constructora de Obras S.A.S y la Urbanizadora Teruel S.A.S. Trámite en el que se ordenó la vinculación de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia -CORANTIOQUIA- y el municipio de Bello.

**I. ANTECEDENTES.**

1. Por reparto, correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello el proceso de la referencia, mismo que una vez admitió la demanda en providencia del 6 de octubre del 2017, luego de haberse surtido el trámite de rigor, en auto del 16 de marzo del 2023 declaró la falta de competencia por el factor subjetivo atendiendo al criterio de unificación que fijó la Corte Suprema de Justicia en providencia AC140-2020, esto es, “*el juez competente para conceder estos juicios es el del domicilio principal donde esté radicada la entidad pública*”. Aunado a la improrrogabilidad de la competencia en estos casos, que determinó la Corte en ponencia AC1359-2021 “*No puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el*

numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad pública, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequívocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, además, por estar inserta en un canon de orden público”, y, así como la decisión que en un caso similar adoptó una Sala de Decisión de esta Corporación<sup>1</sup>, en la que se consideró que, como la entidad demandante es una Empresa Industrial y Comercial del Estado y la sede principal es el Municipio de Medellín, dispuso la remisión a los Juzgados de Circuito de esa localidad.

Una vez realizado el nuevo reparto, correspondió el asunto, en suerte, al Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, el cual tampoco admitió la competencia, y así lo declaró mediante auto del dos (02) de mayo del hogaño, pues, en su sentir: *“En este asunto aplica el foro privativo del numeral décimo del canon 28 del C.G.P. Sin embargo, están presentes dos entidades de naturaleza pública, Empresas Públicas de Medellín E.S.P y el municipio de Bello, entes que tienen su domicilio en municipios diferentes, Medellín y Bello, respectivamente, dable es entender, entonces, que como el ordenamiento no establece una regla específica que priorice alguno de ellos, el demandante se encontraba habilitado para radicar su demanda en uno u otro.”*; por consiguiente, al fungir el municipio de Bello como parte en el proceso al ostentar la calidad de propietario del bien destinado a soportar el gravamen real de servidumbre, considera que cuando el juez se apartó del conocimiento del asunto por falta de competencia territorial por el factor subjetivo *“desconoce que esa regla le otorga idoneidad para continuar con su impulso y proveerlo de mérito, pues una de las entidades públicas tiene su domicilio en el lugar donde ejerce la función jurisdiccional”*. De esta manera, declaró su incompetencia y, por ahí mismo, propuso el conflicto de competencia, ahora objeto de estudio por esta Corporación Judicial.

Visto lo anterior, procede la Sala a decidir la controversia, previas las siguientes,

## II. CONSIDERACIONES.

<sup>1</sup> Tribunal Superior de Medellín, M.P. Piedad Cecilia Vélez Gaviria. Auto del 20 de octubre del 2022.

1. El Estatuto Procesal Civil establece los denominados “factores de competencia” como manera de determinar el juez natural del proceso. Entre estos factores, se encuentra el territorial, que comprende el “fuero” general o personal, el real, y el contractual. La coincidencia de al menos dos de estos fueros origina el denominado fuero concurrente.

Como se señaló en el párrafo inmediatamente anterior, uno de esos factores resulta ser el territorial, para lo cual la ley procesal se asiste de los denominados fueros o foros: personal, real y contractual. El primero de los fueros, el personal o conocido por la doctrina como general, atiende al lugar del domicilio del demandado “*actor sequitur forum rei*”, previsto en nuestro estatuto procesal -C.G.P.-, en su art. 28, numeral 1º. Este *forum domicilii rei* o domicilio del demandado, es el foro establecido como regla general para fijar la competencia por el factor territorial, a menos que exista un fuero especial, que lo releve.

2. Ahora, tratándose de la acción tendiente a la imposición de servidumbre, en la cual es parte una entidad territorial, una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, en observancia de la disciplina legal imperante en la materia, es correcto afirmar que se presenta una contradicción normativa, pues, mientras el numeral 7 radica tales procesos -de manera privativa- en el lugar de ubicación del bien inmueble, el numeral 10 de la misma norma adjetiva radica la competencia -de manera privativa- en el juez del domicilio de la entidad pública, veamos:

“ARTÍCULO 28. COMPETENCIA TERRITORIAL. La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas: 7. En los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante. (...) 10. En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad.”

3. Sin embargo, a pesar de la claridad de la norma, no puede perderse de vista que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia unificó el criterio de fijación de competencia en la providencia AC-140 del 24 de enero de

2020 con ponencia del Dr. Álvaro Fernando García Restrepo, tras considerar que cuando concurren los dos fueros privativos señalados en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del C.G.P, prevalece la calidad de las partes, previendo que es mas gravosa la validez del proceso cuando se deriva de la inobservancia del factor subjetivo, traduciéndose en consecuencia, en la improrrogabilidad de aquel fuero:

*«La justificación procesal de esa prelación muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesión a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo Código es más gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticipó, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribución legal privativa que merece mayor estimación legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideración de la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, está enlazada con una de carácter territorial.*

*Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este último, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuración normativa, no excluyó en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a más que ello desconoce cómo el factor subjetivo está presente en distintas disposiciones procesales, según se dejó clarificado en el anterior acápite.*

*De ahí que, tratándose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicación del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad pública la que obra como parte, el fuero privativo será el del domicilio de ésta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinnúmero de oportunidades, que “en las controversias donde concurren los dos fueros privativos antes citados, prevalecerá el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad pública, por expresa disposición legal” (AC4272-2018), así como también que “en esta clase de disyuntivas, la pauta de atribución legal privativa aplicable, dada su mayor estimación legal, es la que se refiere al juez de domicilio de la entidad pública, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideración a la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido” (AC4798-2018)».*

**3.** Como viene de verse, teniendo en cuenta que el orden de los factores consulta exactamente el mayor grado de lesión a la validez del proceso, especialmente cuando su inobservancia se deriva del factor subjetivo, advirtiéndose que en este supuesto, la competencia se hizo improrrogable, y deberán aplicarse la pauta de atribución legal privativa que merece mayor

estimación legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, en razón de la naturaleza jurídica<sup>2</sup>, solución que se presenta con independencia de una posible prórroga de la competencia territorial, ya que inicialmente el juzgado receptor asumió el conocimiento de las diligencias, o en su defecto, porque no hubiera sido rebatida dicha incompetencia territorial por alguna de las partes, pues estamos frente a un caso de improrrogabilidad de la competencia, sin que pueda interpretarse que por el hecho de la entidad demandante haber presentado la demanda en otro municipio significa una renuncia al fuero subjetivo que el legislador radicó en ella exclusivamente, renuncia que no está permitida, tal y como lo advirtió la Corte Suprema de Justicia en el auto de unificación en cita, que me permito copiar in extenso:

*«(...) En el artículo 16 del nuevo estatuto procesal civil se estableció la improrrogabilidad de la competencia por los factores subjetivo y funcional, razón por la cual, los jueces pueden declarar su falta de competencia por esos factores incluso después de haber impartido trámite al proceso, con independencia de que esta haya sido o no alegada por las partes y de que la relación jurídico procesal haya sido trabada, en cuyo caso lo actuado hasta antes de la sentencia conservará validez, incluidas las medidas cautelares que hayan sido practicadas.*

*Así se dejó consignado en el informe de ponencia para segundo debate al proyecto de Ley Número 196 de 2011 de la Cámara de Representantes, donde al referirse a la justificación de la modificación introducida al proyecto inicialmente presentado sobre esta materia, puntualmente en lo que respecta al actual artículo 16, se señaló lo siguiente:*

*“Artículo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia. En primer lugar, se modifica el título de la norma por uno más técnico y preciso, por cuanto el artículo regula tanto la prorrogabilidad como la improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia. De otro lado, se precisa el alcance de la improrrogabilidad de la jurisdicción y de la competencia por los factores subjetivo y funcional, para evitar dudas en torno a las consecuencias de que el proceso sea iniciado y tramitado por un juez distinto del asignado por la ley en desatención de estos factores. En virtud de la aclaración realizada, queda claro que lo único anulable es la sentencia y la actuación procesal que adelante el juez después de declarada su incompetencia, es decir, lo actuado ante el juez carente de jurisdicción o carente de competencia por los factores subjetivo y funcional es válido hasta que se advierta y declare tal circunstancia. Además, se hace énfasis en que la competencia por factores distintos del funcional y del subjetivo (objetivo, territorial y conexidad) es prorrogable, lo que implica que si no se pone en discusión oportunamente la falta de competencia queda radicada en el juez que inició el trámite, aunque originariamente no hubiere sido el competente con aplicación de las demás reglas de competencia”.*

*Es decir, que esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo trae consigo otra cuestión sumamente importante, cuál es la imposibilidad de dar aplicación al principio de la perpetuatio jurisdictionis. En efecto, si el legislador optó por*

<sup>2</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil AC1730 del 23 de junio de 2023. Radicado 11001-02-03-000-2023-02230-00.



establecer el carácter de improrrogable a los citados foros de distribución, lo que se traduce en que de ellos no se puede disponer ni aun bajo el consentimiento de las partes, y determinó que, aunque lo actuado por el juzgador sin jurisdicción y competencia conserva validez, menos la sentencia, lo que finalmente consagró fue una excepción al principio de la perpetuatio jurisdictionis.

Finalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condición de imperativa de las normas procesales por ser de orden público (Art. 13, C.G.P.), surge una última consecuencia, no menos importante, el carácter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en razón de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia tácita a la prerrogativa que confieren, como lo sería, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades públicas en el evento previsto en el numeral 10º del artículo 28 del citado estatuto.

En tal sentido, no puede afirmarse que si un órgano, institución o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, está renunciando automáticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ahí que, no puede renunciar a ella. Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que “No puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad pública, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequívocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, además, por estar inserta en un canon de orden público. Recuérdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, “[l]as normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización legal” (CSJ AC4273-2018)».

En el caso sub examine, se advierte que los extremos procesales están conformados por entidades públicas y quien funge como demandante es Interconexión Eléctrica S.A E.S.P., y el Municipio de Bello, quien fue vinculado posteriormente al interior del proceso, según se desprende de la providencia del 05 de julio del 2019 (Cdo Digital 36Auto), lo que en principio permitiría inferir que ambos juzgados podrían ser competentes para asumir el conocimiento del asunto, según el factor subjetivo. Sin embargo, no puede perderse de vista que como la competencia no varía por intervención sobreviniente de personas con calidades especiales, ello quiere decir, que deberá darse aplicación al fuero concurrente privativo, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales de competencia previamente descritas, esto es, en el lugar de domicilio de la Empresa industrial y Comercial del Estado, correspondiente al municipio de Medellín.

En corolario, observado el caso en concreto y, con sujeción a la norma adjetiva que viene de citarse, además de las consideraciones que ha merecido el asunto, encuentra el Tribunal que, con prístina claridad, la competencia para conocer de la controversia estudiada debe ser atribuida al Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín, lugar a donde se ordena enviar la demanda para lo de su cargo.

De esta manera y por las razones expuestas, *el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil***

### III. RESUELVE:

**PRIMERO:** DIRIMIR el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Bello y Doce Civil del Circuito de Medellín, indicando que el competente para conocer de este proceso es el segundo de los nombrados.

**SEGUNDO:** REMITIR el expediente al Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín, para que asuma la competencia del asunto.

**NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE,**



**JULIÁN VALENCIA CASTAÑO**  
**MAGISTRADO**

*Hoja de firmas conflicto de competencia con radicado numero 05001 22 03 000  
2023 00214 00*